

## **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: Nivel 1**

Los Estados Unidos son un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres, transgéneros y niños, tanto ciudadanos estadounidenses como extranjeros, víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual y trabajos forzados. La trata puede ocurrir tanto en las industrias lícitas como ilícitas, entre las que se incluyen, actividades de comercio sexual, hostelería, personal de ventas, agricultura, industria fabril, servicios de limpieza y mantenimiento, construcción, astilleros, restaurantes, atención de la salud y cuidado de ancianos, servicios en salones de belleza, ferias y parques de atracciones, venta de puerta en puerta, mendicación y servicios domésticos. Se detectaron personas que, habiendo ingresado a los Estados Unidos tanto en condición migratoria regular como irregular, fueron víctimas de la trata de personas, entre ellas, personas que participaron en programas de visa para trabajadores temporales que satisfacen las necesidades de mano de obra en muchas de las industrias que se describen anteriormente. Funcionarios gubernamentales, compañías y ONG han expresado su preocupación con respecto al riesgo de la trata de personas en las cadenas mundiales de suministro, incluido en contratos federales. Las víctimas provienen de casi todas las regiones del mundo; los tres países principales de origen de víctimas que el gobierno federal detectó en el año fiscal 2014 fueron los Estados Unidos, México y Filipinas. Las poblaciones especialmente vulnerables en los Estados Unidos incluyen: los niños que se hallan en los sistemas de protección de menores y de justicia juvenil, los jóvenes fugitivos y sin hogar, los niños que trabajan en la agricultura, los indígenas estadounidenses y los nativos de Alaska, los trabajadores migrantes, los trabajadores domésticos extranjeros en residencias de diplomáticos, los empleados de comercios en comunidades étnicas, las poblaciones con dominio limitado del idioma inglés, las personas con discapacidades, las poblaciones rurales, y las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgéneros. Algunos ciudadanos estadounidenses se dedican al turismo sexual de menores en el extranjero.

El Gobierno de los Estados Unidos cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata. El gobierno federal continuó investigando y enjuiciando la trata tanto sexual como laboral, y mantuvo índices altos de procesamiento judicial. También continuó prestando varios tipos de servicios especializados a un mayor número de víctimas de trata, así como varios tipos de ayuda migratoria para las

víctimas extranjeras, incluso una vía para obtener la ciudadanía. La labor de prevención incluyó una enmienda a la Reglamentación Federal de Adquisiciones para fortalecer las protecciones contra la trata en los contratos federales. Persisten algunos desafíos: algunas ONG continuaron expresando preocupación en el sentido de que los funcionarios gubernamentales no han elegido sistemáticamente un método centrado en la víctima. Algunas víctimas de la trata, entre ellas personas menores de 18 años de edad, fueron detenidas o enjuiciadas por funcionarios estatales o locales por actividades delictivas relacionadas con su situación de víctimas de la trata de personas, a pesar de las leyes de “refugio seguro” de algunos estados o de la normativa federal que estipula que las víctimas no deben ser penalizadas exclusivamente por actos ilícitos cometidos como consecuencia directa de ser objeto de la trata de personas.

### **Recomendaciones para los Estados Unidos**

Alentar la adopción de políticas centradas en la víctima en los ámbitos estatal y local para cerciorarse de que las víctimas, incluidos los niños, no sean castigados por delitos cometidos como resultado directo de ser víctimas de la trata; apoyar la vivienda adecuada para niños víctimas de la trata que garantice su salud y seguridad mental y física; aumentar los procedimientos de control para detectar a personas víctimas de trata entre los jóvenes en situación de riesgo, individuos detenidos, personas con discapacidades y otras poblaciones vulnerables; procesar enérgicamente la trata laboral; obtener información de los sobrevivientes para mejorar la capacitación, los programas y las políticas; garantizar que se solicite restitución para las víctimas de trata; fortalecer la labor de prevención, entre lo cual se incluye abordar la demanda del comercio del sexo; participar activamente en iniciativas basadas en la cultura que fortalezcan la coordinación entre los sistemas de justicia penal y los servicios sociales en nombre de los indígenas estadounidenses víctimas de la trata de personas; garantizar que los funcionarios federales de las fuerzas del orden soliciten, sin demoras, Presencia Continua para las víctimas que cumplan con los requisitos para ello y que los funcionarios estatales y locales de las fuerzas del orden reciban capacitación en el tema; aumentar la capacitación, con inclusión de las zonas insulares de los Estados Unidos sobre los indicadores de la

trata de personas y el método centrado en la víctima para los funcionarios encargados de la justicia penal y juvenil, funcionarios de los juzgados de familia, inspectores laborales, funcionarios consulares, entidades de servicios sociales y protección al menor y los primeros socorristas; proporcionar enlaces a comunicados de prensa sobre casos federales de trata de personas en un lugar único en internet y apoyar los nuevos estudios de investigación sobre trata en lo que concierne a personal diplomático, militar, de mantenimiento de la paz y otras formas de complicidad oficial.

### **Enjuiciamiento**

El gobierno de los Estados Unidos mostró avances en la labor de aplicación de la ley contra la trata de personas. La Ley de Protección de las Víctimas de Trata del año 2000, y sus enmiendas, prohíbe todas las formas de trata de personas. Además de tipificar estos actos como delitos, la legislación estadounidense prohíbe la conspiración y los intentos de infringir estas disposiciones, así como la obstrucción de su aplicación y la obtención de provecho económico por medio de esos actos. Los enjuiciamientos por trata sexual relacionada con niños no exigen pruebas del uso de fuerza, fraude o coerción. Una ley penal sobre fraude con respecto a la mano de obra extranjera prohíbe el uso de fraude para reclutar trabajadores para trabajos realizados en los Estados Unidos, o en cualquier otro lugar con un contrato con el Gobierno de los Estados Unidos, en propiedades o instalaciones militares estadounidenses. Las sanciones recomendadas por estas leyes son lo suficientemente rigurosas y se equiparan a sanciones estipuladas para otros delitos más graves: las sanciones van hasta la cadena perpetua. El Congreso estadounidense introdujo varios proyectos de ley en 2014 y 2015 que se refieren a la trata, y en septiembre de 2014, se promulgó la Ley para prevenir la trata sexual y fortalecer la familia. Esta ley, entre otras cosas, enmienda un programa federal de cuidado en hogar sustituto para abordar la trata de personas.

Las entidades federales encargadas de investigar y procesar los delitos de trata continúan siendo las que se describen en la narrativa del *Informe de Trata de Personas* de 2014. El período de ese informe marcó la culminación de la Fase I de la Iniciativa del Equipo de Coordinación contra la Trata (ACTeam, por sus siglas en

inglés) lanzada en 2011 por el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés), que lograron racionalizar las investigaciones y procesamientos judiciales sobre la trata de personas. Una evaluación interna de los Distritos de ACTeam encontró un considerable aumento de fallos condenatorios por trata relacionados con trabajo forzoso, trata sexual internacional y trata sexual de adultos por la fuerza, con fraude o coacción. El DOJ financió 14 equipos de tareas de lucha contra la trata del Modelo de Colaboración Mejorado, que comprenden fuerzas del orden de los ámbitos federal, estatal y local. Durante el período que abarca el informe, el DOL fortaleció su mecanismo para detectar y remitir posibles casos de trata a los socios de las fuerzas de la seguridad, según corresponda.

El gobierno federal presenta los datos policiales por año fiscal (1 de octubre al 30 de septiembre). En el año fiscal 2014, el Servicio de Aplicación de las Leyes de Inmigración y Aduanas del Departamento de Seguridad Nacional informó que se habían abierto 987 investigaciones probablemente relacionadas con la trata de personas, un descenso con respecto a las 1.025 investigaciones del año fiscal 2013. El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) abrió formalmente 835 investigaciones sobre trata de personas, un aumento con respecto a las 734 investigaciones del año fiscal 2013, y los equipos de tareas del Modelo de Colaboración Mejorado (ECM) del Departamento de Justicia iniciaron 1.083 investigaciones. El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) informó que se abrieron 154 casos relacionados con trata de personas en todo el mundo durante el año fiscal 2014, un descenso con respecto a los 159 casos del año fiscal 2013. El Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en inglés) informó que se investigaron 14 casos relacionados con la trata de personas relacionados con personal militar, un aumento de nueve casos con respecto al año fiscal 2013.

El DOJ procesa los casos de trata de personas por medio de las 94 Fiscalías Generales de los Estados Unidos y de las dos unidades especializadas que prestan servicios a los expertos del DOJ, sobre el tema, en todo el país. En conjunto, el DOJ inició un total de 208 causas federales por trata de personas en el año fiscal 2014, habiendo imputado a 335 acusados. De estas causas, 190 se vinculaban mayormente

con trata sexual y 18 de ellas con trata laboral, aunque algunas incluyeron ambos delitos. Estas cifras representan un aumento con respecto al año fiscal 2013, durante el cual el DOJ presentó 161 causas, e imputó a 253 acusados.

Durante el año fiscal 2014, el DOJ obtuvo condenas contra 184 tratantes, en comparación con las 174 condenas obtenidas en el año fiscal 2013. De ellas, 157 estuvieron relacionadas, en su mayoría, con la trata sexual y 27 se relacionaron con la trata laboral, aunque algunas de ellas comprendían ambos delitos. Estas cifras no incluyen casos de trata sexual de menores presentados en virtud de otras leyes, aparte de las leyes contra la trata de personas. Las sanciones impuestas a los tratantes que recibieron fallos condenatorios oscilaron entre cinco años y cadena perpetua. Por primera vez, el gobierno utilizó una disposición de jurisdicción extraterritorial de la ley para declarar culpable a un tratante por un delito de trata sexual que tuvo lugar en otro país.

Las ONG solicitaron datos más específicos y de más fácil acceso sobre procesamientos de trata en los ámbitos federal, estatal y local y una mayor priorización de los enjuiciamientos por trabajo forzoso. Un informe financiado por el gobierno federal señaló que, en algunos casos, los organismos de las fuerzas del orden tuvieron dificultad en reconocer la trata laboral y distinguirla de otras formas de explotación laboral e infracciones en el entorno laboral, y que la voluntad de las víctimas de identificarse y cooperar con la policía varió según el nivel de confianza que los agentes de la policía establecieron con las posibles víctimas y los proveedores de servicios para víctimas.

Ciertas ONG expresaron preocupación de que los fiscales federales no hubieran solicitado enérgicamente restitución obligatoria para las víctimas de trata. Un informe de una ONG publicado durante el presente período de informe señaló que, entre 2009 y 2012, los tribunales federales ordenaron restitución solamente en el 36 por ciento de los casos y que las víctimas de la trata laboral tuvieron considerablemente mayores posibilidades de obtener restitución que las víctimas de la trata sexual, habiendo recibido casi cinco veces más en restitución. El informe señaló que, si bien muchos fiscales tratan de obtener restitución, no está claro cuándo se le debe restitución a una víctima de trata sexual ni en qué razones se basa la restitución debida, y los intentos de obtener restitución pueden fallar en los casos

en que las víctimas prestaron servicios que son ilegales.

El gobierno demostró resultados en cuanto a abordar la complicidad oficial en el ámbito tanto federal como estatal. El gobierno denunció por lo menos cuatro casos nuevos de complicidad de funcionarios gubernamentales en la trata de personas. Un miembro del ejército fue arrestado con el cargo de trata sexual de una persona de 17 años de edad. Un miembro de la armada fue arrestado en Hawái acusado de trata sexual de un menor de 16 años de edad. Otro miembro de la fuerza naval fue investigado por denuncias de trata sexual de menores y fue sentenciado en Virginia a cinco años de cárcel por delitos de menor grado. Un tercer miembro de la armada fue sentenciado por varios delitos, entre ellos, proxenetismo, a diez años de cárcel en California por usar a un niño para actos sexuales con fines comerciales donde participaron también otros seis miembros de la armada en servicio activo. El gobierno progresó en los casos mencionados en el *Informe de Trata de Personas* del año anterior. Un oficial de policía del Distrito de Columbia fue sentenciado a siete años de cárcel por explotar a niñas en actividades relacionadas con la prostitución y, en Texas, un oficial probatorio de menores fue declarado culpable de trata sexual. Estos cuatro fallos condenatorios de oficiales representan un aumento con respecto a los dos del año anterior.

Además de las leyes federales, las leyes estatales forman la base de la mayoría de las acciones penales, por lo cual la aprobación de leyes estatales contra la trata es fundamental para institucionalizar el concepto de servicio involuntario para la masa de funcionarios policiales locales. Un informe de una ONG en 2014 señaló mejoras en las leyes estatales contra la trata en los últimos años, pero observó que el financiamiento necesario para garantizar la puesta en práctica de esas leyes era una dificultad. El informe también señaló que todavía se necesitan leyes estatales que presten asistencia y protejan de manera integral a las víctimas de la trata de personas. Otro informe indicó que, aun en los estados que poseen leyes contra la trata de personas, las lagunas jurídicas en la legislación federal sobre inmigración y la debilidad de algunos códigos laborales estatales pueden dificultar el enjuiciamiento de los tratantes laborales. En algunos casos, las víctimas de la trata, incluidos menores de 18 años de edad, continuaron siendo tratadas como delincuentes.

El gobierno federal continuó recogiendo datos estatales y locales sobre

investigaciones de trata de personas durante el período del presente informe mediante el Programa de Informes Uniformes de Delincuencia del FBI; sin embargo, no todas las jurisdicciones estatales y locales participaron, y en el momento de presentar el informe no se disponía de datos. No existe un mecanismo formal para dar seguimiento a los procesamientos en los ámbitos estatal y local.

El Gobierno de los Estados Unidos continuó realizando esfuerzos para capacitar a los funcionarios e intensificó su labor de intercambio de información. Por ejemplo, el DOJ elaboró una guía electrónica en línea para orientar las operaciones efectivas de equipos de tareas y puso en marcha un vasto fortalecimiento de capacidades para las fuerzas de seguridad, personal militar, proveedores de servicios sociales, inspectores laborales, abogados *pro bono* y otros. El DHS actualizó un curso de capacitación virtual y produjo vídeos de capacitación para el personal de las fuerzas del orden. Las entidades federales continuaron un proyecto piloto en 10 países a fin de aumentar el caudal de información sobre la trata de personas en el exterior con un nexo con los Estados Unidos. El FBI y la Dirección de Aplicación de las Leyes de Inmigración y Aduanas de los EE. UU. (ICE) capacitaron a socios locales sobre indicadores de la trata sexual y dirigieron operaciones de aplicación de las leyes destinadas a mejorar la capacidad durante el Super Bowl de 2015 y posteriormente.

## **Protección**

El gobierno federal redobló sus esfuerzos por proteger a las víctimas de la trata; sin embargo, el número de víctimas que recibió ayuda migratoria específicamente vinculada a la trata descendió con respecto al período de informe anterior. Los Estados Unidos mejoraron la prestación de servicios multidisciplinarios de respuesta, centrados en la víctima para la identificación de víctimas y los servicios a ellas, certificaron a un número considerablemente mayor de víctimas de trata, prestaron servicios a un mayor número de víctimas y aumentaron el financiamiento para esos servicios. El gobierno federal cuenta con procedimientos formales para orientar a los funcionarios en la identificación de víctimas y su remisión a los proveedores de servicios; financia varias líneas de denuncias anónimas, tales como, una línea telefónica directa y un servicio de referencia administrados por una ONG; y financia organizaciones no gubernamentales que prestan servicios específicos para víctimas de trata de personas.

La asistencia a víctimas financiada por el gobierno federal incluye la gestión y remisión de casos para atención médica y dental, salud mental y tratamientos por uso indebido de sustancias, alimento y albergue, servicios de traducción e interpretación, asesoramiento legal y migratorio, empleo y capacitación, asistencia en transporte y otros servicios tales como apoyo para la justicia penal. El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) prestó servicios para una gestión integral de casos de víctimas de trata extranjeras y nacionales y financió subvenciones para el fortalecimiento de capacidades de los sistemas de protección de menores, a fin de responder a la trata. El DOJ prestó servicios integrales y especializados tanto para víctimas de trata extranjeras como nacionales. El financiamiento federal para la asistencia de víctimas aumentó en el año fiscal 2014. El DHS brindó acceso a las víctimas identificadas durante las investigaciones a servicios especializados y prestó apoyo a través de especialistas en asistencia a víctimas y en entrevistas forenses, durante las etapas de investigación y enjuiciamiento. Con esta asistencia, el DHS prestó asistencia a 446 víctimas de trata de personas en el año fiscal 2014, un aumento con respecto a 330 víctimas en el año fiscal 2013.

En el año fiscal 2014, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) emitió 530 certificaciones para extranjeros adultos y 219 cartas de elegibilidad para niños extranjeros, un considerable aumento con respecto al año fiscal 2013, cuando el HHS emitió, respectivamente, 406 y 114. La certificación les permite a las víctimas adultas recibir servicios federales y estatales cuando se confiere Presencia Continua o cuando una víctima tiene una solicitud *bona fide* o aprobada de “categoría T de no inmigrante”, como se describe más adelante. La carta de elegibilidad permite el inmediato acceso a prestaciones y servicios financiados por el gobierno federal cuando hay información fidedigna que indica que un niño puede ser víctima de trata. El HHS adjudicó \$7,4 millones en el año fiscal 2014 a tres ONG por la prestación de servicios de gestión para casos de víctimas extranjeras, mediante una red nacional de subreceptores de ONG, un aumento con respecto a los \$4,5 millones del año fiscal 2013. Por medio de esas concesiones, el HHS apoyó a 153 ONG proveedoras de servicios en todo el país, que prestaron asistencia a un total de 1.137 personas y sus familias, un aumento con respecto a las 915 personas del año anterior. Las ONG indicaron que la falta de capacitación en el proceso de certificación del HHS para

empleados de las oficinas de prestaciones públicas dio lugar a la denegación equivocada de prestaciones para algunas de las víctimas y sus familias. En el año fiscal 2014, el HHS aportó nuevo financiamiento para atender a víctimas de trata nacionales, incluidos \$1,44 millones para prestar servicios coordinados centrados en la víctima y \$2,25 millones para abordar la trata de personas dentro de los sistemas de protección de menores.

Durante el período del presente informe, el DOJ prestó asistencia a un número mayor de víctimas de trata, incluso a más víctimas de trata que el año pasado. Desde el 1 de julio de 2013 hasta el 30 de junio de 2014, las entidades subvencionadas por el DOJ que prestan servicios a víctimas de trata informaron tener más de 2.782 casos abiertos, incluidas 1.366 víctimas nuevas, en comparación a 1.911 casos abiertos y 1.009 nuevas víctimas del año anterior. Las entidades subvencionadas por el DOJ informaron que el 55 por ciento de las víctimas atendidas durante el presente período de informe eran extranjeros y el 45 por ciento eran ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales. Durante el año fiscal 2014, el DOJ aportó fondos a 28 organizaciones que prestan servicios a víctimas en todos los Estados Unidos, alcanzando la cifra aproximada de \$10,9 millones, en comparación con \$11,2 millones en el año fiscal 2013 y \$5,4 millones en el año fiscal 2012.

Los sistemas de registro utilizados por el DOJ y el HHS no permitieron el uso de referencias cruzadas para determinar cuáles víctimas fueron atendidas por ambos departamentos. Una ONG informó que todavía existen disparidades entre los niveles de protección para víctimas de trata sexual y de trata laboral, incluidas las víctimas de la trata laboral de menores. Un estudio financiado por el gobierno federal sobre trata laboral en los Estados Unidos señaló que algunos funcionarios locales de las fuerzas del orden no reconocieron los indicadores de la trata laboral y algunas de las víctimas de trata laboral pasaron meses o años después de escaparse antes de que las pusieran en contacto con proveedores de servicios. Las ONG continuaron informando que el financiamiento federal de servicios a las víctimas continuó siendo insuficiente para afrontar el gran número de necesidades de cada una de las víctimas. Los albergues y viviendas para todas las víctimas de trata, especialmente para víctimas varones y de trata laboral, continuaron siendo insuficientes y en algunos casos dieron lugar a que las víctimas regresaran a situaciones inseguras. El gobierno

federal aumentó considerablemente la provisión de fondos para víctimas de la trata de personas, por medio de la asignación más de \$42 millones de fondos al DOJ y más de \$15 millones de fondos al HHS para el año fiscal 2015. Las ONG informaron también que, en algunas ocasiones, las autoridades colocaron a las víctimas en residencias restrictivas, creando una situación que se asemejaba a las circunstancias que la víctima había padecido bajo el control del tratante.

Algunas ONG señalaron preocupación con respecto a la eficacia del gobierno federal en cuanto al control de niños migrantes no acompañados de quienes las autoridades federales tomaron conocimiento. La TVPA describe los procedimientos que se aplican a los niños que ingresan no acompañados de países contiguos y que son apresados en la frontera o puerto de entrada. Esos niños deben ser examinados para asegurarse de que no sean víctimas de la trata y que no corran riesgo de serlo, que no teman ser perseguidos y que sean capaces de tomar decisiones independientes sobre la posibilidad de retirar sus solicitudes de admisión a los Estados Unidos. Si cumplen con todas estas condiciones, se les puede permitir que retiren sus solicitudes y regresen a su país de origen. De lo contrario, esos niños deben ser tratados de la misma manera que los niños no acompañados de países no contiguos, quienes deben transferirse al HHS dentro de un plazo de 72 horas después de determinarse que el niño no está acompañado. Cuando se coloca a un niño bajo la custodia del HHS, se le examina para averiguar si es víctima de trata en los Estados Unidos o en el exterior. Cuando sea procedente, el HHS efectúa una determinación de elegibilidad para recibir beneficios y servicios, los cuales pueden incluir asistencia a largo plazo. En 2014 el HHS prestó asistencia a 113 niños víctimas de trata, a través de su programa para menores refugiados no acompañados, el cual exige que los estados presten la misma asistencia, cuidado y servicios disponibles para niños en régimen de acogida.

Los Estados Unidos prestaron apoyo a víctimas extranjeras y estadounidenses por medio de coordinadores de asistencia a víctimas en oficinas fiscales y de las fuerzas del orden durante las investigaciones y los procesamientos sobre trata, y brindaron protección inmigratoria para los extranjeros. El DHS ofrece dos formas de ayuda migratoria para víctimas de trata: Presencia Continua a corto plazo y “categoría de no inmigrante de visa T” a un plazo más largo (generalmente denominada visa T).

Ambas condiciones migratorias confieren el derecho de trabajar legalmente en los Estados Unidos. Los solicitantes de la visa T deben estar en los Estados Unidos por motivos de trata de personas y cooperar con solicitudes razonables formuladas por los funcionarios de las fuerzas del orden, a menos que sean menores de 18 años de edad o no puedan cooperar debido al padecimiento de traumas. En la solicitud de una visa T, las víctimas pueden presentar peticiones para algunos familiares, incluso algunos miembros de la familia extendida que enfrenten peligros o represalias; los beneficiarios de la visa T y los familiares directos tienen autorización para trabajar y tienen derecho a determinadas prestaciones y servicios públicos federales. Después de tres años, o una vez que se finalice la investigación o el procesamiento judicial, las víctimas con visa T pueden tener derecho a solicitar la condición de residente permanente legal y, con el tiempo, pueden tener derecho a solicitar la ciudadanía.

En el año fiscal 2014, el DHS expidió Presencia Continua a 130 víctimas de trata que eran posibles testigos, un continuo descenso con respecto a 171 víctimas en el año fiscal 2013 y 199 en el año fiscal 2012. El DHS otorgó la visa T de no inmigrante a 613 víctimas y a 788 familiares de las víctimas elegibles en 2014, lo cual representa un descenso con respecto a 848 y 975, respectivamente, en los dos períodos anteriores. No se dieron a conocer las actualizaciones previstas para las normas de otorgamiento de la visa T. Ciertas ONG señalaron su continua preocupación con respecto al bajo número de condiciones de Presencia Continua que se expiden a las víctimas de trata y la dificultad que enfrentaron algunas de las víctimas de la trata para obtener la condición de Presencia Continua. En abril de 2015, el DOL comenzó la puesta en marcha de una nueva política para certificar solicitudes de visa T, que las ONG señalaron aportaría más posibilidades para prestar el apoyo necesario a las víctimas. Los informes de las ONG también indicaron que, en algunos casos, la aplicación de las normas de inmigración por los funcionarios de las fuerzas del orden estatales y locales afectó negativamente la buena disposición de las víctimas inmigrantes de acercarse a las autoridades locales en busca de ayuda.

Otro beneficio migratorio a disposición de las víctimas de la trata es la “categoría U de no inmigrante” (denominada por lo general visa U) para víctimas de determinados delitos habilitantes que ayudan en la investigación o procesamiento de la actividad delictiva habilitante. Hay un máximo reglamentario de 10.000

expediciones de visas U por cada año fiscal. En el año fiscal 2014, se otorgó la aprobación a 17 solicitantes principales para quienes la trata fue un delito habilitante. En 2015, el DOL extendió su programa de visa U a fin de considerar solicitudes de certificación para tres delitos habilitantes adicionales: trabajo forzoso, fraude en la contratación de trabajadores extranjeros y extorsión. Sin embargo, las ONG informaron que las víctimas de la trata continuaron enfrentando dificultades para obtener visas U, haciendo referencia, en algunos casos, a períodos de tramitación más largos y a una demanda general que excedía el tope anual reglamentario. El DHS informó que el período de tramitación, tanto para la visa T como la U, descendió en el año fiscal 2014.

En 2014, un programa del DOS reunió a 327 familiares con víctimas de trata identificadas en los Estados Unidos, un aumento de 240 en el año fiscal 2013 y de 209 en el año fiscal 2012. Este programa prestó asistencia a cinco sobrevivientes para regresar a su país de origen. El DOS aportó \$724.893 en el año fiscal 2014 para apoyar este programa.

Varios organismos del gobierno federal continuaron proporcionando capacitación a las fuerzas del orden en los ámbitos federal, estatal, local y tribal, así como a los prestadores de servicios de las ONG y a los proveedores de servicios de atención de la salud y servicios humanos, a fin de promover una aplicación más sistemática del método centrado en la víctima en todas las fases de la identificación, asistencia, recuperación y participación de víctimas en el proceso de justicia penal.

Aunque existieron programas de subvención, federales, estatales y locales, para niños vulnerables y jóvenes en riesgo, las víctimas de trata de menores, especialmente niños varones y jóvenes transgéneros, enfrentaron dificultades para obtener los servicios necesarios. Durante el período del presente informe, el HHS mantuvo el nivel de financiamiento para capacitar a los proveedores de servicios para jóvenes fugados del hogar y sin hogar, y continuó prestando asesoramiento a los proveedores de servicios y a los estados sobre cómo abordar la trata de menores, especialmente en los aspectos que se entrecruzan con el sistema de protección de menores y con los programas para jóvenes fugitivos y sin hogar. Una ONG informó acerca de la trata sexual infantil controlada por pandillas y el creciente uso de los medios sociales por los tratantes para reclutar y controlar a sus víctimas. Las ONG

continuaron expresando su preocupación de que la labor federal y estatal de prevenir y responder a las denuncias sobre trata laboral de menores fue inadecuada.

Algunas víctimas de la trata, incluidas las menores de 18 años, fueron detenidas o enjuiciadas por conductas cometidas como consecuencia directa de ser víctimas de trata. Las ONG informaron que muchas autoridades estatales y locales no trataron a los niños víctimas de la trata sexual como víctimas de trata, al arrestarlos y encarcelarlos, incluso en estados con leyes de “refugio seguro” destinadas a protegerlos de tal penalización. Además, las ONG informaron que las fuerzas del orden, estatales y locales continuaron arrestando a algunas víctimas identificadas como víctimas de trata, a fin de garantizar que recibieran acceso a servicios mediante la detención y, en algunos casos, para obtener testimonios contra el tratante. Para abordar estos desafíos, el HHS hizo posible la capacitación con defensores, abogados y proveedores de servicios en todos los Estados Unidos para incrementar la identificación de víctimas de trata.

## **Prevención**

El Gobierno de los Estados Unidos avanzó en su labor de prevenir la trata de personas. El Equipo Interinstitucional de Tareas para Vigilar y Combatir la Trata de Personas del Presidente señaló los logros de las instituciones en la lucha contra la trata de personas. Los organismos federales brindaron oportunidades para recibir aportes y transparencia de las partes interesadas, incluida una convocatoria a un foro en la Casa Blanca con líderes del sector privado y organizaciones no gubernamentales sobre la lucha contra la trata de personas en las cadenas de suministro y la incorporación de consultores sobrevivientes en los cursos de capacitación y campañas de extensión del gobierno. El gobierno continuó implantando el *Plan Federal de Acción Estratégica de Servicios para las Víctimas de la Trata de Personas en Estados Unidos, 2013-2017*.

El gobierno continuó poniendo en marcha medidas de extensión pública sobre las causas y consecuencias de la trata de personas. El HHS continuó financiando una ONG para que administre el Centro Nacional de Recursos para la Trata de Personas y la línea directa de ayuda que recibió más de 21.000 llamadas en 2014 de todos los Estados Unidos. En el ámbito estatal, 25 estados exigieron o fomentaron la publicación o promoción de un número de línea directa de ayuda para la trata. Las

embajadas y consulados de los Estados Unidos en todo el mundo publicaron un folleto de “Conozca sus derechos” que incluye el número de una línea directa de ayuda y confirma que los solicitantes de visas de trabajo temporal y de intercambio de visitantes hayan recibido, leído y comprendido el folleto, una iniciativa que luego generó 791 llamadas a la línea directa nacional. Algunas embajadas y consulados también comenzaron a mostrar un vídeo nuevo, disponible en 13 idiomas, de “Conozca sus derechos” en las salas de espera de los consulados. Un informe financiado por el gobierno federal señaló que para que las oficinas consulares detecten más casos de trata de personas se necesita mayor capacitación. El Departamento de Transporte y el DHS iniciaron una campaña de concienciación para la industria de autobuses que incorporó los aportes de las partes interesadas. Durante el año 2015, el DHS continuó su Campaña Azul, a escala nacional, sobre trata de personas y aportó capacitación tanto a fuerzas del orden estadounidenses como internacionales. El HHS creó un nuevo sitio en internet “*End Trafficking*” [Poner fin a la trata] y realizó actividades de extensión en nuevas comunidades, incluidos los líderes tribales. El Departamento de Educación finalizó una guía en internet para ayudar a las comunidades escolares a identificar posibles víctimas, tomar las medidas apropiadas para proteger a los estudiantes y trabajar con socios en las fuerzas del orden. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) financió actividades de lucha contra la trata en más de 15 países. La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés) llevó a cabo más de 250 eventos de extensión, entre ellos, entrevistas de los medios, capacitación y presentaciones a poblaciones marginadas. El Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés), en colaboración con el DHS inició un programa de capacitación sobre concienciación en materia de trata de personas a disposición para más de 100.000 empleados del USDA, en los 50 estados y en el exterior. El Departamento de Defensa (DOD por sus siglas en inglés) ofreció capacitación sobre lucha contra la trata de personas anual a todo su personal, tanto civil como militar, incluso a las tropas antes de ser destacadas al exterior, como parte de las misiones de mantenimiento de la paz. El gobierno continuó realizando actividades de concienciación para su personal, tales como capacitación sobre concienciación en general, capacitación relacionada específicamente con los miembros de las fuerzas

del orden y profesionales de adquisición, y realizó esfuerzos para capacitar al personal en las oficinas locales. Las ONG mencionaron que la labor de prevención debería destacar mejor los derechos y protecciones de las víctimas de acuerdo con la legislación federal y debería tratar de obtener aportes de los sobrevivientes para alcanzar mejor a las posibles víctimas.

Hubo denuncias de abusos, entre ellos, denuncias de trata de personas, de trabajadores en los Estados Unidos con visas de trabajo u otras visas de no inmigrante. En un informe de marzo de 2015, la Oficina de Contabilidad Gubernamental recomendó aumentar las protecciones para los trabajadores extranjeros. Las ONG informaron que los Estados Unidos no tenían suficientes leyes que regularan a los reclutadores de trabajadores extranjeros y que el fraude estaba proliferando entre estos reclutadores. Para reducir la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes, las ONG solicitaron la promulgación de una ley federal que, además de prohibir que los reclutadores cobren cuotas a los trabajadores, exija que los reclutadores divulguen las condiciones de empleo, que los reclutadores estén registrados con el gobierno y que disponga que los reclutadores que violen estas protecciones estén sujetos a sanciones. Durante el presente período de informe, el DOL y el DHS tomaron medidas para fortalecer las protecciones del trabajador con respecto a sueldo, condiciones laborales, transparencia con relación a la identidad de los reclutadores de trabajadores extranjeros, prestaciones y recursos, tales como protección contra represalias, que deben ofrecerse a trabajadores categoría H-2B (trabajadores agrícolas temporales) y a trabajadores estadounidenses que desempeñaban trabajos similares. Tanto los programas de H-2A (trabajadores agrícolas temporales) como los H-2B prohíben que se cobren cuotas, directas o indirectas, a los trabajadores extranjeros por ofertas de empleo, reclutamiento u otras cuotas relacionadas con el empleo, y ambos requieren la divulgación de las condiciones de empleo.

En el Programa de Experiencia de Trabajo de Verano de la visa J-1, el DOS prohibió trabajos que se consideren peligrosos para la salud, la seguridad o el bienestar del visitante de intercambio y continuó poniendo en práctica un programa para vigilar la salud, la seguridad y el bienestar de los participantes. En el verano de 2014, el DOS visitó 676 sitios de visitantes de intercambio en 33 estados y, para comienzos de

2015, había realizado 54 visitas de lugares en seis estados.

El gobierno brindó capacitación sobre lucha contra la trata de personas para su personal diplomático, dirigida a prevenir su participación en delitos de trata o en la facilitación de dichos delitos. El DOS brindó capacitación en clase y por internet para personal diplomático de seguridad, oficinas consulares y otros empleados. El gobierno continuó su labor de prevenir el trabajo forzoso de los trabajadores domésticos empleados por personal de misiones extranjeras (o por empleados extranjeros de organizaciones internacionales) en los Estados Unidos, que incluyó la prohibición de deducir comida y alojamiento de los sueldos y la exigencia de que los pagos de sueldos no se efectúen con dinero en efectivo directamente al trabajador. En 2014, el DOS informó a los Jefes de Misión Adjuntos de las embajadas extranjeras, reiterando los requisitos de los Estados Unidos y la responsabilidad de las misiones extranjeras con respecto al bienestar de estos trabajadores. A pesar de estos esfuerzos, las ONG plantearon preocupaciones de que los diplomáticos extranjeros podrían evadir las medidas de protección vigentes para los trabajadores domésticos extranjeros y recomendaron que el gobierno tomara medidas adicionales para proteger a los trabajadores domésticos empleados por diplomáticos extranjeros.

La aplicación de las leyes federales en el ámbito civil fue un componente importante de la labor del gobierno en la lucha del gobierno contra la trata de personas. El DOL se concentró en las industrias que emplean a trabajadores vulnerables y sus investigadores fueron, a veces, las primeras autoridades gubernamentales que detectaron prácticas laborales explotadoras. La EEOC, la cual hace cumplir el Título VII de la Ley de los Derechos Civiles de 1964 y otras leyes sobre discriminación laboral, continuó la litigación de tres casos relacionados con trata de personas en nombre de más de mil demandantes.

La legislación federal permite que una víctima de trata presente independientemente una demanda civil. En 2015, un jurado federal otorgó \$14 millones por daños y perjuicios a cinco trabajadores extranjeros de la India víctimas de un ardid de trata laboral en Mississippi y que presentaron demandas civiles. El monto fue el mayor que jamás se haya adjudicado en un caso de trata laboral en los Estados Unidos. Las ONG observaron la importancia de las disposiciones jurídicas estatales, tales como

el código civil de California, que permite que se presenten reclamos en nombre de las víctimas de trata.

La legislación estadounidense ofrece jurisdicción extraterritorial sobre delitos de turismo sexual infantil cometidos por ciudadanos estadounidenses en el exterior. El FBI efectuó seis arrestos por delitos que dieron lugar a seis procesamientos y dos individuos fueron declarados culpables de turismo sexual de menores en el año fiscal 2014. En 2014, el DHS tomó medidas decididas para prevenir el turismo sexual infantil e intercambió información con homólogos de las fuerzas del orden en el exterior sobre agresores sexuales de menores registrados antes de que viajaran al exterior (desde los Estados Unidos). El DHS realizó más de 45 arrestos vinculados al turismo sexual infantil en el año fiscal 2014.

El Gobierno de los Estados Unidos tomó medidas para reducir la demanda del comercio sexual y del trabajo forzoso en el período del presente informe. El DHS trabajó con socios de ciudades y estados para crear conciencia sobre la trata previamente al Super Bowl de 2015. El DOD formuló una nueva política que prohíbe que el personal militar en Corea del Sur pague para obtener compañía de empleados de los llamados “*juicy bars*” [bares jugosos] debido a la vinculación de esos bares con la prostitución y la trata de personas. El DOD investigó 39 casos de miembros del servicio que, supuestamente, violaron la prohibición del DOD en relación con la adquisición de actos sexuales comercializados, lo cual significó un aumento con respecto a los 27 casos investigados el año anterior.

El gobierno enmendó la Reglamentación Federal de Adquisiciones en 2015, a fin de fortalecer las protecciones contra la trata en contratos del gobierno federal, incluida la prohibición a los contratistas y a todos los que forman parte de su cadena de suministro, de cobrar cuotas de reclutamiento a los empleados, de usar reclutadores que no cumplen con las leyes laborales del país donde tiene lugar el reclutamiento y de usar prácticas de reclutamiento fraudulentas. El FBI y otros organismos federales encargados de la aplicación de la ley investigaron las denuncias de servidumbre por deudas y las excesivas cuotas de reclutamiento que se requerían de nacionales de terceros países que trabajan en ciertos contratos del gobierno estadounidense en el exterior. No hubo informes sobre denuncias de demandas civiles ni procesos penales, ni de otras sanciones contra empleadores o contratistas laborales que

hubieran desacatado las leyes, ni de que se hayan excluido a empleadores o contratistas laborales de los programas estadounidenses por incumplimiento de las normas.

El DOL actualizó la lista de bienes con respecto a los cuales tiene fundadas razones para creer que se producen por medio del trabajo de menores o el trabajo forzoso, infringiendo las normas internacionales, y agregó las bebidas alcohólicas y la carne. El DOL tradujo a tres idiomas el juego de herramientas basado en internet destinado a prestar asesoramiento a las empresas y a otras partes interesadas sobre cómo abordar el trabajo de menores y el trabajo forzoso en las cadenas de suministro mundiales.

El Departamento del Interior (DOI, por sus siglas en inglés) presta servicios directamente o por medio de contratos, subvenciones o pactos a 566 tribus reconocidas por el gobierno federal, con una población atendida de aproximadamente 1,9 millón de indígenas estadounidenses e indígenas de Alaska, la cual se sabe que incluye poblaciones vulnerables a la trata de personas. En el año fiscal 2014, el DOI continuó sus actividades de extensión con varios organismos de aplicación de la ley en los ámbitos federal, estatal y tribal, para determinar cómo la trata de personas afecta a las comunidades tribales, y para identificar prácticas promisorias y los servicios necesarios para las víctimas. El HHS continuó organizando sesiones de diálogo con líderes tribales, integró la trata como parte de sus actividades de consulta tribal y presentó un memorando de información sobre trata de personas a los 183 adjudicatarios de la Administración para Indígenas Estadounidenses en todo el país y los territorios del Pacífico. El HHS otorgó fondos a una ONG para ofrecer educación y formación de la fuerza laboral para hombres indígenas estadounidenses jóvenes que corren alto riesgo de explotación sexual comercial y dirigió programas de capacitación para proveedores de atención de la salud que prestan servicios a posibles víctimas de trata de personas en la zona de Bakken en Dakota del Norte. Los desafíos incluyen la falta de una infraestructura de justicia penal adecuada a las necesidades del país indígena y la escasez de servicios sociales para las víctimas.

## **Zonas insulares de los Estados Unidos**

Se cree que todas las formas de trata de personas ocurren en las zonas insulares de los Estados Unidos. Durante el período del presente informe, en el Estado Asociado Libre de Puerto Rico, un tratante sexual de menores fue condenado y sentenciado a más de 24 años de cárcel. El Departamento de Policía de Puerto Rico y el DHS investigaron el caso y el DOJ lo llevó a juicio ante un tribunal federal. Si bien tres secciones del código penal de Puerto Rico abordan la esclavitud, no ha sido actualizado para que refleje las leyes modernas contra la trata. En las Islas Vírgenes Estadounidense no se promulgó un proyecto de ley contra la trata presentado en una sesión anterior. En 2014, el HHS aportó financiamiento para capacitación sobre lucha contra la trata en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes. En Guam, hay un equipo de tareas para la trata de personas que consta de cuatro comisiones: extensión e investigación, intervención, aplicación de la ley y servicios a víctimas. También había un equipo de tareas dirigido por el DOJ en la mancomunidad de las Islas Marianas Septentrionales (CNMI, por sus siglas en inglés). No se tuvo conocimiento de ninguna investigación, enjuiciamiento ni identificación de víctimas en relación con la trata de personas en el territorio de Samoa Americana, Islas Marianas Septentrionales, Guam o de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, durante el período del informe.